

La amnistía de Sánchez

Aunque pareciera entregarle algún aire al gobierno de Pedro Sánchez, la decisión del Tribunal Constitucional español que validó la ley de amnistía para los independentistas de Cataluña más bien agrega otro factor de polarización en un tenso escenario político. La ley había sido una condición de los partidos catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y los cuestionamientos a su constitucionalidad ponían en jaque la permanencia del Ejecutivo. Con todo, el fallo dista de resolver las cosas.

Por una parte, aún hay dudas de que el Tribunal Supremo de justicia, pese a la decisión del TC, vaya efectivamente a aplicarle la amnistía al líder independentista catalán Carles Puigdemont —prófugo en Bruselas—, imputado por malversación de fondos públicos a raíz del financiamiento del referéndum secesionista de 2017; los jueces estiman que este tipo de delitos no está cubierto por esa ley. Por otro lado, el propio fallo del órgano constitucional ha despertado un durísimo cuestionamiento en la oposición y en la opinión pública, que ha puesto en evidencia la politización de esa instancia, donde los votos se distribuyeron según las cercanías políticas que se atribuyen a cada magistrado. Particularmente, se cuestiona el papel jugado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, considerado por la oposición como un operador del gobierno. Así, la juridicidad del fallo está en entredicho y con ello también la legitimidad de una amnistía que —según lo que se ha adelantado de los votos de minoría— fue descrita por una de las magistradas como “el sometimiento del derecho a la política”.

Lejos de traer calma, el fallo del TC agudiza la polarización en España.

En realidad, si algo no se avizora en el horizonte del gobernante español es calma. Los escándalos de corrupción que lo cercan, y que involucran tanto a su partido como a algunos de sus familiares más cercanos, no dan tregua: se aguardan nuevos informes de la Guardia Civil que podrían abrir nuevas aristas. Y en este contexto, empiezan a oírse con más fuerza voces disidentes en el propio PSOE, que desafían el férreo control de Sánchez. El más duro de los críticos ha sido el expresidente Felipe González, quien volvió esta semana a arremeter contra la amnistía, calificándola como “corrupción política” y “una vergüenza para cualquier demócrata y cualquier militante del PSOE”. Pero fue mucho más allá: no solo apoyó un adelanto electoral, sino que afirmó que no votaría por los socialistas si Sánchez va a la reelección, precisamente por su papel en la “barrabasada” de la amnistía.

Por ahora —y pese a los fuertes cuestionamientos—, el actual gobernante confía en el hecho de que la oposición no tiene los votos para censurarlo en el Congreso y que, aunque su coalición es frágil, es improbable que los independentistas le quiten el apoyo antes de las elecciones. Además, se preocupa de hacerles gestos a los sectores de izquierda, como fue su estudiado rechazo, en la cumbre de la OTAN, a incrementar el presupuesto de defensa del 2 al 5%. Su posición le valió la amenaza de Donald Trump de que lo haría “pagar el doble” en el tema de los aranceles: una disputa que puede ser delicada para los intereses del país, pero que le sirve a Sánchez para agradar a algunos de sus socios de coalición y abrir un foco de atención distinto de los escándalos.